

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, cuatro (4) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2022-00230.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición** formulado por los demandados ESTHETIC AMP S.A.S y ELBA XIMENA VILLACREZ RUIZ, contra el auto de fecha 25 de marzo de 2022 mediante el cual se libró mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

1. La parte recurrente adujo que el título ejecutivo-contrato de arrendamiento- base de la ejecución carece de los requisitos formales para reclamar su cobro por la vía ejecutiva, en virtud a que únicamente tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2018; no obstante, los cánones de arrendamiento objeto de cobro corresponden al periodo comprendido entre enero a noviembre de 2021, sin que se acreditara que el contrato fue objeto de prorrogación razón por la cual las obligaciones no son claras y exigibles.

Aunado a lo anterior señaló que, no existe póliza debidamente firmada por el tomador dejando sin efecto la subrogación efectuada por Seguros Comerciales Bolívar S.A., así mismo, la póliza tampoco brinda certeza de la continuidad de la misma como los recibos de pago de los cánones causados hasta el año 2021.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte actora, quien dentro del término legal se opuso a su prosperidad argumentando que el contrato de arrendamiento base de la ejecución estuvo vigente hasta el 25 de mayo de 2022, fecha en la cual se logró la restitución del inmueble.

Agregó que, en el contrato de arrendamiento se pactaron las condiciones de las prórrogas y reconvenciones por el término de doce meses una vez vencido el término inicial por lo cual el convenio se prorrogó en múltiples oportunidades.

En cuanto a la póliza de seguro informó que se encuentra vigente desde el 1º de agosto de 2008 tratándose de un seguro colectivo de cumplimiento para contratos de arrendamiento y el hecho de que no se encuentre firmado por el tomador no le resta validez o eficacia ya que el contrato de seguro es un contrato bilateral y consensual amén que se encuentra demostrado el pago de las indemnizaciones.

III. CONSIDERACIONES

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. Ahora bien, para resolver el asunto puesto a consideración cumple precisar que tratándose de procesos ejecutivos que son aquellos tendientes a la obtención del cumplimiento forzoso de una pretensión que se adeuda y que resulta de un título que tiene fuerza por sí mismo de plena prueba, exige que los acreedores para poder hacer efectivas las obligaciones sobre el patrimonio del deudor, deben aportar un instrumento que a su vez debe contar con determinadas calidades, pues debe ser contentivo de una obligación clara, expresa y exigible en contra del demandado y a favor del acreedor demandante, reuniendo los requisitos determinados en el Artículo 422 del Código General del Proceso.

De lo anterior se desprende que en el ordenamiento jurídico exige para el cobro coercitivo de una obligación como presupuesto básico la presencia de un título ejecutivo que debe acreditar sin lugar a dudas la existencia de una obligación a favor del acreedor y en contra del demandado en todo su contenido sin necesidad de acudir a una indagación preliminar, de modo que, se debe estar en posesión de un documento constituido previamente que de manera indiscutible acredite la prestación en todos sus aspectos, a tal punto que de ella emerja claramente de su simple lectura sin que sea menester acudir a interpretación alguna cualquiera de los elementos que la integran.

Al respecto, el tratadista Oscar Eduardo Henao Carrasquilla en comentarios al precitado artículo 422, precisó:

“El título ejecutivo debe reunir los requisitos señalados en la ley. La inexistencia de esas condiciones legales hace del título un documento anómalo, incapaz de prestar mérito ejecutivo. En otros términos, nadie niega la existencia del título, lo que se ataca es su idoneidad para la ejecución. En consecuencia, para que el título sea ejecutivo, para que

*pueda emplearse en un proceso de ejecución, debe contener los siguientes requisitos: a. Que conste en un documento; Que ese documento provenga del deudor o su causante; c. Que el documento sea autentico o cierto; d. Que la obligación contenida en el documento sea clara; e. Que la obligación sea expresa; f. Que la obligación sea exigible y, g. Que el título reúna ciertos requisitos de forma.”*¹

En ese orden de ideas, se tiene que en el evento en que el extremo pasivo del litigio mediante recurso de reposición cuestiona el mandamiento de pago lo debe hacer con fundamento únicamente en causas de defectos formales o legales del título aportado como base de la acción pues de otro modo si se debiese acudir a otros medios probatorios, la impugnación de la ejecución sólo será posible a través de los medios exceptivos previstos en la ley y los cuales deben ser objeto de análisis y posterior pronunciamiento en la etapa procesal oportuna sin que sea ésta al desatar tal remedio en los términos del inciso segundo del artículo 430 del estatuto procesal.

3. Conforme a las anteriores precisiones descendiendo al caso puesto a consideración del Despacho se advierte que la providencia objeto de censura se encuentra ajustada a los parámetros exigidos por la ley, toda vez que, el documento que acompañó a la demanda como báculo de la ejecución-contrato de arrendamiento- reúne los requisitos de forma necesarios para que pueda demandarse ejecutivamente y en consecuencia, ningún reparo cabe hacer sobre su condición de título ejecutivo, pues tratándose de estas clases de asuntos en que los arrendatarios asumen la obligación de pagar el precio pactado en el contrato de arrendamiento las sumas de dinero a su cargo por conceptos derivados del mismo se tornan exigibles ejecutivamente.

Lo anterior, como quiera que se identifica de forma clara quienes son los arrendatarios y quién el arrendador, el objeto contractual, el precio establecido para el canon y los conceptos que se incluyen, así mismo se indicó la data para el cumplimiento, documento que se encuentra suscrito por las partes de manera que no hay lugar a dudas respecto la concurrencia de las condiciones de carácter formal que exige el ordenamiento jurídico para reclamar las sumas presuntamente adeudas a través de la acción ejecutiva siendo este el procedimiento idóneo para tal fin.

En tal sentido, resulta de carácter imperativo traer a colación lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 820 de 2003 en punto de la exigibilidad de las obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento, que al tenor reza:

“Las obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con base en el contrato de arrendamiento y de conformidad con lo

¹ Henao Carrasquilla Oscar Eduardo, C. G. P. artículo 422 (2021), pag 539, Leyer Editores.

dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil. En cuanto a las deudas a cargo del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios o expensas comunes dejadas de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario por la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o recibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la manifestación que haga el demandante bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron canceladas por él, la cual se entenderá prestada con la presentación de la demanda.”

Ahora bien, la falta de exigibilidad y claridad del título objeto de cobro que según el extremo pasivo del litigio se producen porque el término contractual feneció el 30 de junio de 2018, así como, las cuestiones relacionadas con la póliza de seguro suscrita por la arrendadora Inmobiliaria Bogotá S.A.S., con la aquí demandante Seguros Comerciales Bolívar S.A., argumentos centrales del presente recurso, constituyen circunstancias fácticas que sin hesitación alguna deben ser alegadas a través de las excepciones de mérito que deben ser definidas y resueltas en la oportunidad procesal pertinente, esto es, la sentencia, toda vez que los mismos revisten asuntos de carácter sustancial y no se encuentran encaminados a enderezar el procedimiento o la estructura de la demanda.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia T-283 de 2013 realiza una clara diferenciación frente a las condiciones sustanciales y las condiciones formales con las que debe contar el título ejecutivo, siendo éstas últimas las que la ley prevé se pueden estudiar mediante recurso de reposición formulado contra la orden de apremio así:

“...De estas normas se deriva que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las condiciones formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

(...)

Las condiciones sustanciales exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es **clara** la obligación que no da lugar a equívocos, es decir, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Que sea **expresa** implica que de la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación. Que sea **exigible** significa que su cumplimiento no está

sujeto a un plazo o a una condición, es decir, que se trata de una obligación pura y simple y ya declarada.”

Es que, no puede perderse de vista que el título ejecutivo adosado con la demanda es el contrato de arrendamiento celebrado por la Inmobiliaria Bogotá S.A.S. con los aquí demandados, de manera que las excepciones relativas a los requisitos formales deben enmarcarse única y exclusivamente a cuestionar la idoneidad de dicho documento para reclamar el cumplimiento forzoso de las obligaciones allí contenidas, sin que pueda someterse a discusión mediante el recurso de reposición los aspectos atinentes al contrato de seguro como la falta de firma del tomador y su vigencia, supuestos que en últimas se encaminan a cuestionar la legitimación en cabeza de la parte actora redundando de forma directa en las pretensiones de la acción.

Al respecto, cumple precisar que la legitimación en la causa es un presupuesto sustancial de la acción y no procesal, motivo por el que, en caso de encontrarse acreditada, la consecuencia jurídica a que dé lugar debe ser declarada en la sentencia. En relación a este tópico la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló:

*“...Preciso es notar cómo la legitimación en la causa, ha dicho insistentemente la Corte, **es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal**, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. Por eso, **su ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino motivo para decidirla adversamente**, pues ello es lo que se aviene cuando quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es el llamado a contradecirlo, pronunciando ese que, por ende, no sólo tiene que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido lógico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo éste formalmente puro, conduce a la inconveniente práctica de que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo o para que siéndolo en la realidad lo aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder...”² (énfasis fuera de texto).*

4. En ese orden de ideas comoquiera que los argumentos planteados en el recurso de reposición no versan sobre asuntos formales del título base de la ejecución, sino que buscan enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado en el presente asunto y atacan en estricto sentido las pretensiones del libelo introductor, se traducen en aspectos de carácter sustancial que deben ser resueltos en un estadio procesal distinto, en consecuencia, no hay lugar a revocar la providencia censurada.

² S-094 de agosto 14 de 1995, M.P.: Nicolás Bechara Simancas

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: MANTENER INCÓLUME el auto de fecha 25 de marzo de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGÚNDO: Por secretaría contrólese el término con el que cuentan los demandados para contestar la demanda.

Vencido, ingrese al despacho a fin de continuar con el trámite.

Notifíquese,³

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:
Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b0d280b76745fce37351a641e4385a8df6ad56b73e346df57195e0a8bbb5564f**

Documento generado en 04/10/2022 12:38:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

³ Esta providencia se notificó por estado No. 111 de 05 de octubre de 2022.